

**Andreas Baumer**

## **De la polarización a la ruptura: la derogación del consenso sobre la política antiterrorista y el alto el fuego de ETA**

### **1. Introducción**

“Al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el gobierno va iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular” (*El País*, 30/06/2006). Con estas palabras anunció José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno español, el 29 de junio de 2006 el comienzo de una nueva fase en el proceso que se inició, por lo menos aparentemente, con la declaración, tres meses antes, de un alto el fuego permanente por parte de tres militantes de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Las reacciones de los partidos políticos representados en las Cortes hacia esta declaración institucional del presidente del Gobierno reflejaron el estado del debate sobre la política antiterrorista: todos los partidos salvo el Partido Popular (PP) avalaron la iniciativa del Ejecutivo. El amplio consenso que iba desde los escaños de los partidos nacionalistas moderados pasando por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hasta los diputados de Izquierda Unida (IU) fue contrastado por la oposición fundamental y fundamentalista del Partido Popular. Un par de días después, José María Aznar, ex-jefe de Gobierno y presidente de honor del PP, denunció que el Ejecutivo socialista y ETA “caminan juntos”.<sup>1</sup> La acusación de que el gobierno de Zapatero se ha subordinado a la organización terrorista fue el último eslabón de una larga cadena de descalificaciones e insultos por parte del mayor partido de la oposición

---

<sup>1</sup> *El País*, 3/07/2006.

a la política seguida por el gobierno socialista frente al conflicto vasco. Se puede considerar como la confirmación de la ruptura definitiva del consenso en la política antiterrorista.

Esta ruptura del consenso, punto culminante de la estrategia del PP en relación con la política antiterrorista del gobierno, ha sido desarrollada en tres dimensiones: bloquear cualquier iniciativa de solución del conflicto vasco que vaya más allá de una solución meramente policial y judicial; desprestigiar al máximo al gobierno socialista, en general y al presidente del Gobierno, en particular y, por último, combinar el ejercicio de una oposición fundamental en el parlamento con el fomento de la polarización social, especialmente a través de la participación activa en las movilizaciones callejeras. Elementos de esta estrategia se pueden detectar en el discurso del PP en otras materias de política interior, véase por ejemplo el debate sobre el Estatuto de Cataluña, pero en ningún caso adoptaron una radicalidad semejante. Esto contrasta con la cualidad especial que hasta entonces caracterizaba la política antiterrorista en España. Dado el hecho de que desde los tiempos de la transición la amenaza terrorista fue percibida como uno de los mayores desafíos para la sociedad española, la política antiterrorista fue considerada como una política de Estado que trascendió las diferencias entre partidos políticos. Este consenso se transformó en una serie de pactos políticos, tanto a nivel estatal (Pacto de Madrid, 1987), como a nivel del País Vasco (Pacto de Ajuria Enea, 1988).<sup>2</sup> El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido como Pacto Antiterrorista, firmado por el PP y el PSOE en el año 2000, afirmó este consenso entre los dos grandes partidos –aunque reflejó al mismo tiempo la anulación parcial del consenso por parte de los firmantes del Pacto de Lizarra–.<sup>3</sup> En junio

---

<sup>2</sup> Es preciso subrayar que este consenso se refería a la política antiterrorista legal, es decir, al conjunto de las medidas políticas, judiciales y policiales dentro del marco del Estado de derecho. El caso de la llamada “guerra sucia” de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fue fuertemente criticado por el PP, que lo convirtió en uno de sus mayores frentes de ataque al último gobierno de Felipe González (Baumer 2005: 125-130; Woodworth 2005: 73-76).

<sup>3</sup> Acuerdo político suscrito el 12 de septiembre de 1998 en la localidad navarra de Lizarra. Fue firmado por Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Eusko Alkartasuna (EA), Ezker Batua (EB), Euskal Herriarok (EH) y otras organizaciones políticas y sociales (véase más adelante).

de 2006 este consenso quedó roto. Ante una oportunidad inédita de acabar con la pesadilla del terrorismo nacionalista, el partido más grande de la oposición se aisló de las demás fuerzas demócratas. El fenómeno de la polarización, que caracteriza la política española desde el cambio de gobierno en 2004 en su conjunto, se percibe así en la política antiterrorista de una forma especialmente drástica. Las posibles consecuencias de esa situación no pueden ser más inquietantes: Sin la fuerza y la legitimidad que otorga el consenso de los partidos democráticos, la posición del gobierno en el proceso de pacificación va ser muy difícil y —a la hora de llegar a acuerdos— probablemente insostenible.

Este trabajo quiere apuntar cómo tras el cambio de gobierno en 2004 fue derogado el consenso sobre la política antiterrorista entre los dos grandes partidos hasta llegar a la ruptura explícita en el mes de junio de 2006. Se parte de la hipótesis de que la derogación del consenso se debió sólo en parte a un desacuerdo estratégico sobre las formas de acabar con el terrorismo. Al mismo tiempo, como se verá más adelante, la política antiterrorista ha estado en el centro de la estrategia de confrontación y de deslegitimación del Partido Popular contra el gobierno socialista.

## **2. El consenso contra Lizarra: el Pacto Antiterrorista**

La política antiterrorista en la segunda legislatura del gobierno de José María Aznar fue desarrollada dentro del marco del Pacto Antiterrorista, firmado por el PSOE y el PP en diciembre de 2000. El contexto político de este pacto fue la anulación del consenso de Ajuria Enea por el PNV, EA y EB, el referente vasco de Izquierda Unida, a través de la firma del Pacto de Lizarra en septiembre de 1998. Este acuerdo, suscrito entre todas las fuerzas nacionalistas vascas, incluyendo a Herri Batasuna/Euskal Herriarok, se formuló después de unas negociaciones secretas entre ETA y el PNV en 1998 (Morán 2004: 107-151). En estas negociaciones, ETA se comprometió a declarar una tregua, a cambio del compromiso asumido por parte del PNV de romper con el marco del Estatuto de Gernika y de dar pasos hacia la soberanía. De las elecciones autonómicas de octubre de 1998 salió el primer gobierno exclusivamente nacionalista, sosteniéndose con los votos de Euskal Herriarok.

La primera reacción del gobierno de José María Aznar a la tregua de ETA fue una moderación del discurso y algunos gestos de buena voluntad, especialmente en política penitenciaria. Con el transcurso del tiempo, después de un encuentro infructuoso entre enviados del gobierno y representantes de ETA en Zúrich y de haberse probado que ETA estaba aprovechándose de la situación para recomponer sus comandos y llenar sus arsenales, la actitud del ejecutivo se endureció de nuevo y se empezó a hablar de “tregua trampa” (Morán 2004: 206-208).

Tras el fin de la tregua, la ofensiva de la banda terrorista ETA golpeó con extrema dureza a los cargos políticos del PP y del PSOE. Fue en esta situación cuando los dos grandes partidos optaron por un pacto exclusivo, dejando explícitamente al margen al PNV y a EA (a los que se debería añadir IU) “que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia”. Al mismo tiempo el documento reivindicó el consenso de los partidos democráticos, afirmando que “el terrorismo es un problema de Estado. Al gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición”.<sup>4</sup>

La política antiterrorista desarrollada sobre la base del pacto, se caracterizaba por el acoso político, judicial y policial a las estructuras y organizaciones legales e ilegales del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) (Baumer 2003: 469-451). Concluyó con la prohibición de Batasuna y otras organizaciones ligadas a la izquierda *abertzale*, la inclusión de ETA, Batasuna y otras estructuras del MLNV en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, algunas reformas del derecho penal y la ilegalización de plataformas electorales que intentaban sustituir a Batasuna (Mata 2005: 97). A pesar de unas ligeras críticas del PSOE respecto al uso supuestamente partidario del Pacto por parte del gobierno, la política antiterrorista en esta fase se realizó sobre un consenso sólido entre los dos grandes partidos.

---

<sup>4</sup> Texto Completo del Pacto Antiterrorista PP-PSOE. “Partido Popular y PSOE. Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo”, en: <<http://www.ideasapiens.com/actualidad/politica/nacional/pacto%20antiterrorista%20pp-psoe.htm>> (27/03/2006).

### 3. Del consenso a la polarización: la política antiterrorista después del 14-M

Después del cambio de gobierno que resultó de las elecciones del 14 de marzo de 2004, el panorama de la política antiterrorista quedó reformulado. El nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ascendió al poder en una situación determinada decisivamente por el peor atentado terrorista en la historia del país, no dudó en declarar la lucha contra el terrorismo como prioridad de su ejecutivo. En su investidura, Zapatero dedicó la primera parte de su discurso a esta materia, anunciando el mantenimiento del Pacto Antiterrorista (*El País*, 17/04/2004). Rechazó las demandas por parte de otros partidos, especialmente IU y PNV, a una modificación del Pacto, e insistió en el mantenimiento tanto de la forma como del fondo de dicho acuerdo (*El País*, 13/04/2004).

Pero pronto se dieron señales de que el Ejecutivo socialista estaba dispuesto a considerar nuevos matices en su política antiterrorista. En el marco de la nueva política territorial, el gobierno rechazó el Plan Ibarretxe<sup>5</sup>, aunque no con un discurso tan beligerante como el que fue llevado por el gobierno del PP. Al mismo tiempo, se barajaba la posibilidad de un nuevo Estatuto para Euskadi, siempre y cuando se den las precondiciones necesarias, es decir el cese de la violencia. Se mantenía la Ley de partidos, señalando a Batasuna que la izquierda *abertzale* formaría parte de la pluralidad política vasca representada en las negociaciones de un futuro estatuto sólo después de que “callasen” las armas.

En el entorno de Batasuna se registraron esos nuevos matices en el discurso del gobierno con mucha atención.<sup>6</sup> En noviembre de 2004, Batasuna celebró en el velódromo de Anoeta de San Sebastián su primer acto multitudinario desde su ilegalización en el año 2002. Ante unos 15.000 simpatizantes de la izquierda *abertzale*, Arnaldo Otegi

---

<sup>5</sup> Así se llama popularmente la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi del gobierno vasco. El Plan fue presentado por el *lehendakari* Juan José Ibarretxe en octubre de 2003 y aprobado por el Parlamento vasco en diciembre de 2004. El Plan propone un nuevo estatuto de autonomía, basándose en el derecho de autodeterminación (Morán 2004: 357-360).

<sup>6</sup> El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, llegó a decir de Zapatero que es “un presidente inédito del gobierno español”, *El País*, 23/03/2006.

explicó la nueva propuesta de Batasuna en la que se propuso la creación de dos “espacios diferenciados para el diálogo y el acuerdo”. Según esta propuesta, la negociación política debía tener lugar entre los “agentes de Euskal Herria”, es decir las fuerzas políticas, sociales y sindicales, mientras ETA y “los Estados español y francés” deberían llegar a un acuerdo respecto a la “desmilitarización del conflicto”, a presos y víctimas. Batasuna evitaba exigir a ETA el cese de la violencia, pero asumía el compromiso de “la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” (Batasuna 2004: 17). Resulta difícil imaginar cómo un partido ilegal puede organizar un acto público de semejantes proporciones sin el beneplácito, por lo menos tácito, de las autoridades públicas. Pero fuese como fuese, seguro es que la propuesta de Anoeta ya contenía los elementos clave de lo que un año y medio más tarde sería el itinerario a seguir por el gobierno para emprender el proceso de paz: La creación de dos mesas, lo que implicaba la restricción de las negociaciones con ETA a las materias del desarme y de los presos y la delegación de las negociaciones sobre el futuro político del País Vasco a una mesa de partidos con participación de un referente de la izquierda *abertzale*.

Dos meses después, coincidiendo con una visita de José Luis Rodríguez Zapatero a San Sebastián, Batasuna publicó una carta de Arnaldo Otegi al presidente del Gobierno. En esta misiva, Batasuna renunció tanto a “un escenario independentista para la solución de conflicto” como a “un frente nacionalista vasco que imponga una solución unilateral de conflicto” y reiteró sus propuestas defendidas en Anoeta, pidiendo “el inicio de conversaciones entre su gobierno y la organización ETA para la búsqueda de un escenario de desmilitarización multi-lateral del conflicto” (*El País*, 15/01/2005). Zapatero respondió a Otegi en un discurso pronunciado en un mitin del PSE. Exigió el cese de la violencia antes de “escuchar” a Batasuna y subrayó su voluntad de apostar “fuertemente por ver el fin de la violencia en Euskadi”, afirmando que ya se sabe “hasta qué punto soy capaz de hacer esfuerzos por la paz”. Concluyó su mensaje con un panorama positivo: “La esperanza para Euskadi ha comenzado y el final será la paz y la convivencia entre todos” (*El País*, 15/01/2005). Esta respuesta llamó la atención tanto por su tono optimista como por su fondo político. El compromiso afirmado por Zapatero para hacer esfuerzos por la paz fue interpretado como una oferta de diálogo a ETA después de que ésta haya dado un

primer paso para el final de la violencia. Ya se barajaron rumores sobre un inminente anuncio de una tregua por parte de ETA, una esperanza que la banda frustró un par de días después a través de la explosión de un coche bomba en Getxo, sin causar víctimas. Sin embargo, el discurso optimista de Zapatero ante la militancia socialista en San Sebastián, su medida respuesta a la carta de Batasuna y el anuncio implícito de su disposición al inicio de un diálogo con la izquierda *abertzale* quedaron como afirmación de un nuevo rumbo en la política antiterrorista.

Durante las siguientes semanas, de cara a las elecciones vascas en abril de 2005, el gobierno socialista desarrolló su proyecto político para Euskadi. Basado en el rechazo del plan Ibarretxe y en la renuncia a la reedición de un “frente constitucionalista”<sup>7</sup> con el PP, el gobierno de Zapatero abogó por un proyecto común entre nacionalistas y no nacionalistas para la reforma del Estatuto de Gernika, en el que, tras un cese definitivo de la violencia, podría participar la izquierda *abertzale* (*El País*, 6/02/2005). Con la alusión a la posibilidad de un diálogo con ETA y la formulación de un proyecto para un nuevo estatuto que incluiría todos los proyectos políticos de Euskadi, las líneas maestras de la política de pacificación de Zapatero quedaron dibujadas.

El siguiente acontecimiento decisivo para el debate sobre la política antiterrorista fue la aparición del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) en las elecciones autonómicas en el País Vasco en abril de 2005, que —después de la suspensión de una lista “limpia” de la izquierda *abertzale*— logró el 12,44% de los votos y nueve escaños.<sup>8</sup> El EHAK admitió francamente que su objetivo es garantizar la presencia de Batasuna en la Cámara vasca (*El País*, 19/04/2006). El gobierno no hizo nada ni antes ni después de las elecciones para impugnar este partido ante los tribunales, actitud que levantó ciertas sospechas no solamente en los medios afines al PP. Antonio Elorza comentó en un artículo de opinión, publicado en *El País*: “Alguien puede pensar que en virtud de un acuerdo implícito el gobierno hubiera mantenido fuera de

---

<sup>7</sup> En las elecciones autonómicas vascas de 2001, el espectro político se dividió en dos bloques: el nacionalista, encabezado por Juan José Ibarretxe, y el llamado constitucionalista, constituido por el PP de Jaime Mayor Oreja y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) de Nicolás Redondo Terreros. Fue el bloque nacionalista el que se vio beneficiado por esa polarización (Baumer 2001: 190).

<sup>8</sup> <<http://www.9euskadi-net>> (1/08/2006).

juego al sucesor aparente de Batasuna, salvando así la cara del respeto a la Ley de Partidos, para luego autorizar su participación a través de este estafalario testaferro” (Elorza 2005).

La negativa del gobierno de impugnar a EHAK fue duramente criticada por el Partido Popular. Su presidente Mariano Rajoy condicionó la validez del Pacto Antiterrorista a que el gobierno instara a la ilegalización del partido *abertzale*. El PP elevó el tono de sus críticas a la política antiterrorista del gobierno, acusando al presidente de negociar en secreto con ETA y de haber abandonado el objetivo de derrotar a la banda armada. La confrontación entre el gobierno y el PP respecto a la política antiterrorista encontró su primer clímax en el debate sobre el estado de la nación en mayo de 2005. Zapatero anunció la presentación de una moción que autoriza al gobierno a iniciar bajo ciertas circunstancias un diálogo con ETA. Mariano Rajoy respondió con un duro discurso acusando a Zapatero de que en la lucha contra el terrorismo “se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento” (*El País*, 12/05/2005). Después de la aprobación de la moción para iniciar un diálogo con ETA tras el cese de la violencia, el líder de la oposición completó su polémica contra el presidente del Gobierno con la suposición de que éste se hubiera “puesto en manos de ETA” (*El País*, 18/05/2006).

#### **4. Confrontación y deslegitimación: el discurso del PP**

En las acusaciones citadas ya se pueden encontrar unos elementos que a partir de entonces caracterizaban el discurso del PP hacia la política antiterrorista del gobierno: Según estas acusaciones, no se trataba simplemente de una política equivocada sino de una especie de alta traición. A lo políticamente rechazable se unía lo moralmente intolerable. Ante las más de 800 víctimas mortales de ETA, la acusación de “traicionar a los muertos” tendía a la deslegitimación total del acusado, es decir del presidente del Gobierno. Con la polémica desatada por Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación se consolidó una estrategia de confrontación del PP contra José Luis Rodríguez Zapatero que iba más allá de las disputas políticas acostumbradas en un sistema democrático. Se trata de una estrategia que no solamente busca el triun-



fo en la competición política, sino la deslegitimación del adversario tanto en términos políticos como morales. La materia de la política antiterrorista es el eje central de esta estrategia.

El origen de esta estrategia se encuentra en la interpretación que hace el PP de los sucesos relacionados con la matanza del 11-M y de su derrota en las elecciones generales tres días después. El partido conservador todavía no se ha liberado de la convicción casi paranoica de que la victoria electoral le fue robada por una conspiración de terroristas islamistas, ETA y los socialistas españoles (Baumer 2006: 534). El sin-fín de oscuras alusiones sobre los verdaderos autores de la masacre del 11-M y sus intenciones es la manifestación de esta convicción.<sup>9</sup> La teoría de la conspiración manejada en los ámbitos del PP considera la política antiterrorista del gobierno socialista como prueba de que ETA está logrando los beneficios del cambio político provocado por el 11-M. Un ejemplo de este razonamiento se encuentra en la argumentación de Jaime Ignacio del Burgo, representante de la UPN (Unión del Pueblo Navarro) en el Comité Nacional del PP, miembro de la comisión de investigación del 11-M del Congreso y autor de un libro sobre el 11-M. No puede aportar ninguna prueba que vincule a ETA con los atentados, pero apunta a la posibilidad de que ETA esté cosechando los frutos de su actuación:

Otra gran beneficiaria ha resultado ser ETA. La caída del PP le ha permitido resucitar de sus cenizas y poner en marcha el ‘proceso’ presuntamente pactado, incluso antes del 11-M, con representantes cualificados de Rodríguez Zapatero. [...] Sólo un cambio de gobierno en España podría hacer reversible la situación agónica de la banda. A consecuencia de la polí-

---

<sup>9</sup> Un ejemplo de este tipo de alusiones son los comentarios del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en una entrevista concedida al diario belga *Le Soir*, publicada el 9 de marzo 2006. Preguntado si todavía niega cualquier relación de los atentados con la participación española en la guerra del Irak, Aznar dijo: “(Los atentados) están ligados a la voluntad de algunos de provocar un vuelco político en España”. A la pregunta del periodista por los autores de la matanza, “¿Algunos islamistas o ETA?”, Aznar respondió: “Como ya he dicho algunas veces, pienso que quienes planificaron estos atentados no se esconden en desiertos lejanos, ni en montañas remotas. No diré más” (“Aznar insiste: autores 11-M buscaron ‘vuelco político en España’”, 9/03/2006) <[http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/aznar\\_11-m\\_espana\\_774393.htm](http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/aznar_11-m_espana_774393.htm)> (1/08/2006).

tica antiterrorista del gobierno de Aznar, el único horizonte de la banda parecía ser el de una rendición humillante. A partir de las conversaciones de Perpiñán (con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, A.B.), ETA comenzó a soñar con la perspectiva de una negociación victoriosa. Y aunque no haya prueba que demuestre su implicación en el 11-M, mientras no se lleve a cabo una investigación rigurosa y a fondo de todos los datos que apuntan a una estrecha amistad entre etarras e islamistas, tejida dentro y fuera de las cárceles españolas, la idea de una colaboración operativa no puede ser descartada de raíz. La hipótesis del 11-M como un atentado de encargo no puede descartarse (Del Burgo 2006).

Partiendo de este tipo de análisis, el discurso del PP hacia la política antiterrorista del gobierno se radicalizó cuando se daban las primeras señales de una perspectiva de solución negociada del conflicto, o sea de una “negociación victoriosa” según el criterio de Del Burgo. Como respecto a otras materias de la política interior —véase el debate sobre el matrimonio entre homosexuales o el nuevo Estatuto de Catalunya— el PP pronto apostó por la oposición extraparlamentaria. Empezó a combinar la disputa en el parlamento con la participación activa en movilizaciones callejeras. Así apoyó, el 23 de enero de 2005, la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En esta manifestación fue agredido el ministro de Defensa, José Bono, hecho que refleja el grado de crispación que se estaba acumulando en el debate sobre la política antiterrorista.<sup>10</sup> Desde entonces, el PP participó en todas las movilizaciones de la AVT contra la política del gobierno. El partido conservador parece apostar por una estrategia que tiende a fortalecer su discurso político contra el gobierno a través de la instrumentalización del dolor de las víctimas. El resultado de semejante estrategia no puede ser otro que una profundización de la polarización y un aumento de la crispación en la política española.

En el ámbito político, el PP se quedó solo con su estrategia de confrontación. José Luis Rodríguez Zapatero logró un amplio consenso

---

<sup>10</sup> En la manifestación, que discurrió por las calles de Madrid bajo el lema “Memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo” el ministro de Defensa fue vapuleado, insultado y golpeado con una bandera de España. Otros altos cargos socialistas, coma la eurodiputada Rosa Díez, fueron insultados. Los manifestantes corearon consignas contra el gobierno y a favor del PP (*El País*, 23/01/2005).

para la resolución que respalda el inicio del diálogo con ETA después del cese de la violencia.<sup>11</sup> El 17 de mayo de 2005, todos los grupos parlamentarios menos el PP, votaron a favor de la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En el segundo párrafo del texto se dice: “Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje”.<sup>12</sup> Más abajo, la moción constata: “A la fortaleza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo hay que añadir una condición imprescindible: la unidad democrática de los partidos políticos y que eso significa la eliminación de la confrontación partidaria en la política antiterrorista”.<sup>13</sup>

Pero la situación de la política antiterrorista en España en los meses siguientes a este debate se quedó muy lejos de la citada unidad democrática de los partidos. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, insistía en la acusación de que el gobierno había roto unilateralmente el Pacto Antiterrorista al no promover la ilegalización de EHAK, mientras que el gobierno reafirmó que seguían vigentes los principios de este pacto (*El País*, 6/09/2006). Más allá de las posturas referentes al Pacto Antiterrorista, el desacuerdo estratégico entre el gobierno y el mayor partido de la oposición quedó cada vez más patente: mientras Zapatero seguía los pasos hacia una solución dialogada, ya respaldada por la

---

<sup>11</sup> La resolución recogía el espíritu del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, donde se constata: “Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia.” Los 17 puntos del pacto de Ajuria Enea, en: <<http://www.terra.es/actualidad/terrorismo/documentacion/documento9.htm>> (27/03/2006)

<sup>12</sup> Resolución del Grupo Socialista sobre la lucha contra el terrorismo. <<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/16/espana/1116227166.html>> (10/08/2006)

<sup>13</sup> *Ibíd.*

resolución correspondiente aprobada por el Congreso en mayo, el PP se atrincheró en sus convicciones de que exclusivamente el acoso político, policial y judicial podrían terminar con el problema de ETA. Este desacuerdo llevó a una interpretación contraria de los acontecimientos. Durante el verano de 2005 se notaba la práctica ausencia de la habitual “campana de verano” de ETA, es decir, de una ola de atentados contra intereses turísticos como en años pasados. Al mismo tiempo la ilegalizada Batasuna aumentó considerablemente su presencia pública. Dirigentes socialistas como Ramón Jáuregui interpretaron esta situación en el sentido de que “Batasuna parece llevar adelante la estrategia que aprobó en la Asamblea de Anoeta, de noviembre de 2004, por la cual la vía política va desplazando a la actividad terrorista” (*El País*, 28/08/2005). Para el PP, la reaparición de Batasuna fue la prueba de la debilidad del gobierno y de que “se está produciendo un retroceso en la política antiterrorista” (*El País*, 28/08/2005).

Mariano Rajoy aprovechó un mitin en Marbella en noviembre de 2005 para resumir el discurso de su partido en contra del gobierno socialista, que en su opinión había sido “muy generoso con ETA”: “Le ha regalado un compromiso de negociación, apoyado por el Congreso de los Diputados, le ha regalado un grupo parlamentario, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, le ha regalado un protagonismo mediático del que carecía, pero sobre todo, le ha regalado una enorme esperanza de que con este gobierno se puede llegar a algún entendimiento” (*El País*, 27/11/2005).

La polémica entre el gobierno socialista y el Partido Popular sobre la política antiterrorista se agudizó mientras el anuncio de una tregua por parte de ETA se percibió como cada vez más inminente. En febrero de 2006, el PP abrió un nuevo frente contra la política del gobierno en torno a la salida de presos etarras de las cárceles por acumulación de penas. Para el PP, esa medida, que se basa en la aplicación del Código Penal de 1973 y que debe ser decidida por los jueces, probaba que el gobierno estaba pagando un precio a ETA (*El País*, 11/02/2006). Además, el PP acusó al presidente del Gobierno de “engañar a todos porque está negociando con ETA” (*El País*, 11/02/2006). José Luis Rodríguez Zapatero, en cambio, mantuvo la negativa de que esto fuese verdad para declarar al mismo tiempo su convicción de que se estaba ante el “principio del fin de ETA”, pero sin presentar informaciones que sostuviesen tal optimismo. El presidente invitó al Partido Popular a que se

incorporarse al consenso con el gobierno, recomponiendo así la unidad de los demócratas en la política antiterrorista (*El País*, 11/02/2006).

Ante la situación de que la declaración de una tregua era inminente, también las asociaciones de las víctimas del terrorismo entraron en la polémica sobre la política antiterrorista y formularon sus exigencias. En el tercer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, celebrado a mediados de febrero de 2006 en Valencia, se aprobó un “decálogo sobre la paz” en el que se afirma que “al terrorismo se le derrota”, se rechaza cualquier precio político por la paz y se exige que “tiene que haber vencedores y vencidos” (*El País*, 14/02/2006). Al mismo tiempo, en el Congreso se puso de manifiesto que entre las distintas asociaciones de víctimas había desacuerdo sobre las posiciones en materia antiterrorista. Mientras la AVT, la organización con mayor peso mediático, mantenía su discurso beligerante con el gobierno y su estrecho alineamiento con el PP, Juan Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, advirtió contra “las manipulaciones políticas, ya que debe quedar claro que nuestro único partido es el ser víctimas”. También Javier Urquizo, portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), exigió que “no usen la lucha antiterrorista con fines partidistas” (*El País*, 14/02/2006). Maite Pagazaurtunda, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, pidió a Mariano Rajoy que “tienda puentes” al gobierno para que “el Pacto Antiterrorista pueda volver a funcionar de forma eficaz”, afirmando que “la tremenda polarización política fortalece a ETA” (*El País*, 1/03/2006).

Pero la polarización política y la crispación social aumentaron todavía más. El 25 de febrero se celebró en Madrid la tercera manifestación de la AVT en contra de la política antiterrorista del gobierno. Bajo el lema “Por ellos, por todos... en mi nombre ¡no!”, entre 200.000, según el cálculo de *El País*, y 1,4 millones de personas, cifra facilitada por la Comunidad de Madrid<sup>14</sup>, se manifestaron en contra de una negociación con ETA. Participaron casi todos los dirigentes del Partido Popular, ente ellos Mariano Rajoy y el ex-presidente del Gobierno, José María Aznar. En su discurso, Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, rechazó el “vergonzoso, demencial y siniestro proceso de ‘pacifica-

---

<sup>14</sup> *El País*, 26/02/2006.

ción' que el gobierno quiere vendernos 'sin vencedores ni vencidos'" (Alcaraz 2006: 3). Además pidió el "fin de la impunidad de la que ETA y su entorno vienen gozando en estos últimos años" y afirmó "que no debemos permitir por un día más que el gobierno se arrodille ante ETA" (Alcaraz 2006: 1). La acusación de traición al presidente del Gobierno y la reivindicación, con referencia al 11-M, de que "el gobierno nos aclare cómo y por qué pudo producirse este atentado" (Alcaraz 2006: 4) completaron su discurso, que demostró la perfecta sintonía con los planteamientos del PP.

Así pues, a la víspera de la declaración del alto el fuego por parte de ETA, el debate sobre la política antiterrorista se caracterizó en el ámbito político por el profundo desacuerdo estratégico entre el Partido Popular por un lado y el gobierno, el PSOE y todos los partidos representados en el Congreso por otro. El PP defendió su postura de derrotar a ETA y su rechazo a cualquier negociación con la banda. El gobierno y —con matices— los demás partidos políticos abogaron por un final dialogado del terrorismo, basándose en los mil días sin atentados mortales, la evidente debilidad de ETA y la voluntad expresada por parte de Batasuna de utilizar exclusivamente la vía política. Al desacuerdo político de fondo, ya de por sí muy problemático en una materia tan esencial como la lucha contra el terrorismo, se sumó la forma del debate que causó la máxima polarización en el ámbito político desde los tiempos de la transición. Las alegaciones del PP en contra del gobierno y, con un énfasis especial, contra José Luis Rodríguez Zapatero, que van desde la traición de las víctimas hasta la rendición ante ETA, son propias de una estrategia que "está más próxima a la concepción de la política de Carl Schmitt que a la teoría democrática" (Pradera 2006). Esta forma de entender la política transformó el desacuerdo político en una polarización y un clima de crispación política con pocos precedentes en la sociedad española desde la transición democrática.

## **5. La resurrección temporal del consenso bajo el síndrome del alto el fuego**

En este escenario estalló el 22 de marzo la noticia esperada: "Euskadi Ta Askatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir

del 24 de marzo de 2006”<sup>15</sup>, anunció una portavoz de la organización en un video-mensaje emitido por la televisión pública vasca (EITB). El anuncio del alto el fuego permanente volcó el paisaje político de España. A pesar de cierta prudencia y cautela, las reacciones de los partidos políticos se caracterizaron por un optimismo generalizado. Todas las fuerzas políticas saludaron con más o menos énfasis la nueva situación. José Luis Rodríguez Zapatero se felicitó por un paso decisivo de su política de pacificación y anunció que, después de haber verificado el alto el fuego, iba a comparecer ante el pleno del Congreso para pedir el mandato de iniciar el diálogo con ETA en las condiciones que resumía la resolución de mayo de 2005. El gobierno apeló al “sentido de Estado” del PP y pidió su apoyo en el proceso que se había iniciado con el alto el fuego (*El Mundo*, 23/03/2006). El PP, que se mostró muy cauteloso a la hora de valorar el anuncio de la tregua, se comprometió en una primera reacción a apoyar al gobierno “dentro de los principios del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo” (*El Mundo*, 23/03/2006). En una reunión entre Zapatero y Rajoy en el palacio de la Moncloa el 28 de marzo, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se comprometieron a buscar juntos el fin de ETA. El periódico *El Mundo* comentó: “José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy dieron ayer ‘un primer paso’ para intentar recuperar el consenso sobre el terrorismo y poder así afrontar un posible proceso de paz. Fue sólo un paso, pero importante, después de dos años de insólita confrontación sobre la lucha contra ETA, con manifestaciones en la calle y enfrentamientos en el Congreso” (*El Mundo*, 29/03/2006).

Base de este acercamiento fueron, entre otras cosas, la garantía explícita por parte de Zapatero de que no hay ningún compromiso con ETA y el acuerdo de no pagar ningún precio político a cambio de la paz. El intento de la reconstrucción del consenso en el ámbito político fue apoyado por las asociaciones de las víctimas del terrorismo. En un comunicado conjunto, las principales organizaciones declararon: “El ‘alto el fuego permanente’ anunciado por ETA no constituye el final del terrorismo. Puede ser, sin embargo, el punto inicial de un proceso que conduzca al final del terrorismo. [...] Una política de final del terroris-

---

<sup>15</sup> Mensaje de ETA ‘al pueblo vasco’, en: <<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/22/espana/1143026624.html>> (10/08/2006).

mo requerirá el acuerdo de los partidos firmantes del ‘Pacto Por Las Libertades y Contra El Terrorismo’, para afrontar con unidad la situación creada con el anuncio de ETA”.<sup>16</sup>

Después de haber conseguido el respaldo del Partido Popular para el proceso de paz, el presidente del Gobierno se reunió con los representantes de los demás partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. En esa ronda de contactos, Zapatero pudo comprobar que cuenta con un respaldo unánime para iniciar un proceso de paz una vez que se verifique que el alto el fuego de ETA es total y definitivo (*El Correo*, 27/04/2006).

En las primeras semanas después de la declaración del alto el fuego por parte de ETA había muchos indicios de que se estaba recuperando el consenso en la política antiterrorista entre todos los partidos políticos. Este consenso político fue respaldado por una amplia mayoría de los ciudadanos que apoyaba el inicio de un proceso para un final dialogado de ETA.<sup>17</sup> Pero la recuperación del consenso resultó ser un fenómeno muy transitorio.

## 6. Hacia la ruptura

Las primeras fisuras en el frágil consenso sobre el proceso iniciado con el anuncio del alto el fuego se abrieron después de que el periódico *abertzale Gara* publicara una larga entrevista con dos miembros de ETA en mayo. Para el PP fue una prueba que la banda “no tiene intención de disolverse y sólo existe un proceso de chantaje que busca la rendición del Estado”, como declaró su secretario general, Ángel Acebes, a *ABC*, para subrayar que el gobierno sigue teniendo el apoyo del PP, “pero para acabar con los terroristas” (*ABC*, 16/05/2006).

---

<sup>16</sup> Comunicado conjunto de las víctimas, en: <<http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/25/espana/1143281481.html>> (10/08/2006)

<sup>17</sup> Según una encuesta del Instituto Opina, publicada por *El País*, el 56,2% de los entrevistados creía que el comunicado de ETA que anunciaba el alto el fuego permanente podía significar el principio del fin de la violencia. El 63,8% de los entrevistados pensaba que “hay que tantear si realmente hay posibilidad” de negociar con ETA. Un 63,7% opina que el PP debe “colaborar con el gobierno sin condiciones”, en: *El País*, 26/03/2006.



Esta línea de argumentación fue consolidada por el PP durante las dos últimas semanas de mayo. Según esta interpretación, el PP se había comprometido a apoyar al gobierno en un proceso para “comprobar si, efectivamente, la decisión que ha tomado la banda es la de disolverse y acabar con la violencia para siempre” (*El País*, 29/05/2006). Es decir, un diálogo con ETA antes de que ésta se rindiese y abandonase las armas quedaba descartado por el primer partido de la oposición. Este rumbo en la actitud del PP dejó al gobierno en una posición muy incómoda. Respondió con una serie de declaraciones según las cuales en el diálogo con ETA, una vez verificado el alto el fuego, solamente se hablará de los siguientes temas: “Del proceso para que deponga definitivamente las armas, para que se disuelva como organización, y del futuro de sus integrantes” (*El País*, 29/05/2006). Pero las explicaciones de Zapatero solamente confirmaron que el desacuerdo estratégico en la política terrorista entre el gobierno y el PP se había mantenido a pesar de las declaraciones tras el anuncio de la tregua. El partido conservador sigue apostando por la rendición de ETA sin más condiciones, mientras el gobierno entiende que la desaparición de ETA no le va a salir gratis. Zapatero hizo pública su estrategia para resolver el conflicto ya antes del alto el fuego: dos mesas de negociación, una entre el gobierno y la banda sobre el desarme, la disolución y los presos, y otra, entre los partidos, sobre el futuro del País Vasco.<sup>18</sup> Que esta concepción del proceso de paz demuestra una cierta convergencia estratégica con las propuestas de Batasuna, presentadas en su asamblea en el velódromo de Anoeta en noviembre 2004, quedó bien patente, y se puede suponer que fue precisamente esa convergencia la que permitió el inicio de un proceso que desembocó en la declaración del alto el fuego permanente. Pedir la rendición incondicional de ETA significa nada menos que la desaprobación total de este proceso –una actitud de una pureza moral indiscutible, pero de difícil conciliación con la realidad política española–.

---

<sup>18</sup> “El Ejecutivo aún no tiene un calendario, pero sí una hoja de ruta del proceso. Ya ha adelantado varias veces. Cuando ETA declare el cese de la violencia, el presidente del Gobierno se tomará un tiempo prudencial para conocer a fondo la voluntad de la banda de abandonar definitivamente el terrorismo, y cuando la constate comparecerá en el Parlamento para ofrecer la hoja de ruta: la apertura del diálogo con ETA y la constitución de la mesa de partidos en Euskadi” (*El País*, 20/02/2006).

Obviamente, el PP no se atrevió, tras la euforia generalizada por el anuncio del alto el fuego, a poner obstáculos a este proceso y declaró su apoyo al gobierno. Dos meses más tarde, después de que los informes de las fuerzas de seguridad del Estado habían verificado el alto el fuego, el PP retiró este apoyo y volvió a su anterior estrategia: la de máxima confrontación al gobierno socialista.

La ruptura formal del Partido Popular con el gobierno se consumó después del anuncio por parte de Patxi López, secretario general del PSE, de su intención de abrir un diálogo formal con todas las fuerzas políticas de Euskadi, incluida la ilegalizada Batasuna (*El País*, 31/05/2006). El PP advirtió que “Zapatero rompería cualquier acuerdo si se sentase con una Batasuna ilegal y terrorista” (*ABC*, 1/06/2006). A partir de este anuncio, el tono del debate acerca de la política antiterrorista se elevó hasta incluso pasar las alturas previas a la tregua. El secretario general del PP, Ángel Acebes, afirmó ante la negativa del presidente de desautorizar los contactos del PSE con Batasuna, que “en este momento, el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA” al proponer “una mesa política en que se negocie políticamente al margen de la ley” (*El País*, 6/06/2006). Un día después, Mariano Rajoy anunció en el Congreso que el PP “rompe toda relación con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, le retira el apoyo que venía prestándole y pondrá todo su empeño en que no se consume lo que consideramos un grave atentado contra el orden jurídico” (*El País*, 7/06/2006). Con esta declaración se creó una situación inédita en la democracia española. El partido más grande de la oposición declaraba la ruptura con el gobierno en una materia tan esencial como la lucha contra el terrorismo.

A partir de entonces, el PP reanudó su estrategia de enfrentamiento ya desarrollada en los doce meses previos a la declaración del alto el fuego. A la oposición fundamental en el Parlamento se sumaron las constantes acusaciones de traición y de colaboración con ETA y la movilización de sentimientos en la calle. El 10 de junio, la AVT llevó a cabo su cuarta manifestación en contra de la política antiterrorista del gobierno y pudo contar una vez más con la activa participación del PP. Esta vez, la asociación de víctimas mezcló ya en el lema de la manifestación su rechazo del diálogo con ETA con oscuras alusiones sobre el atentado del 11-M: la concentración se desarrolló bajo la doble consigna “Negociación, en mi nombre, no” y “Queremos saber la verdad”,

hecho que provocó la protesta de cinco colectivos de víctimas<sup>19</sup> que rechazaron “la mezcla interesada entre el posible diálogo con una banda terrorista y la exigencia de una verdad sobre el 11-M”, reclamaron a la AVT que “deje de hablar en nombre de un colectivo tan amplio y tan plural como es el de las víctimas del terrorismo” y exigieron a la AVT, que deje de hacer política” (*El Diario Vasco*, 8/06/2006).

En esta manifestación que reunió entre 200.000 y un millón de personas, según los diferentes cálculos<sup>20</sup>, en las calles de Madrid, el discurso se desarrolló en la dirección ya avisada por el doble lema, encontrando su momento estelar en la pregunta del presidente de la AVT: “¿Qué información tiene ETA que no tengamos todos los españoles?” para que Zapatero sucumba al “chantaje” (*ABC*, 11/06/2006).

El 29 de junio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en una declaración institucional la apertura del diálogo con ETA, amparándose en la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005. En su discurso reiteró una vez más que la democracia no pagará ningún precio político a cambio de la paz y que las cuestiones políticas sólo se decidirán entre los partidos políticos. Refiriéndose al “futuro de Euskadi”, Zapatero manifestó: “El gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción” (*El País*, 30/06/2006). Con esta declaración, la polémica sobre la política antiterrorista del gobierno aumentó todavía más, porque la oposición conservadora interpretó el párrafo sobre el respeto a las decisiones de los vascos como un reconocimiento del derecho de autodeterminación, el cual fue tajantemente negado por el gobierno. La publicación de un artículo en *Gara*, en el que se afirmaba que el “gobierno español y ETA cerraron en febrero un acuerdo con compromisos y garantías” (*Gara*, 10/07/2006), negado tanto por Bata-

---

<sup>19</sup> La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana y el Grupo Vasco de Víctimas del Terrorismo.

<sup>20</sup> Se repitió una vez más la guerra de las cifras, con el número de manifestantes facilitado por *El País* como mínimo y el de la Comunidad de Madrid como máximo.

sunas como por el gobierno, conformó el desencuentro total en la política antiterrorista entre el gobierno socialista y el PP.

## 7. Algunas conclusiones

El inicio del diálogo con ETA se desarrolla así en una situación política que está caracterizada por la ruptura total entre el PP y el gobierno socialista en el ámbito político y por una fuerte polarización y un clima de crispación en el ámbito social. El gobierno puede contar con el respaldo explícito de los demás partidos, de instituciones sociales como la Iglesia, los sindicatos y el empresariado vasco y con el apoyo expresado por varios líderes de la Unión Europea y por el secretario general de la ONU. La oposición contra la política del gobierno está formada por el principal partido de la oposición, una buena parte de la sociedad civil relacionada con el tema del terrorismo (entre otros, el Foro Ermua, la AVT y buena parte de los colectivos de víctimas) y varios académicos especializados en el tema del terrorismo (Alonso 2006, Uriarte 2006). La opinión pública es, como admiten incluso los críticos del gobierno, mayoritariamente favorable al proceso iniciado (Uriarte 2006: 2).

A primera vista este panorama parece ser normal y corriente en términos democráticos: una cuestión política de un fuerte contenido polarizante que provoca una alineación dentro del ámbito político y dentro de la sociedad en torno a dos polos expuestos, en este caso incluso con una convergencia entre una mayoría política y una mayoría social. Pero se trata del tema que representa el mayor desafío de la sociedad española desde la transición democrática: el terrorismo vasco. Un proceso de solución que no cuenta con un amplio consenso político y social puede tener un futuro incierto. Y es más: en el tema del terrorismo coinciden dos experiencias traumáticas de la sociedad española. Una de larga duración: la del terrorismo de ETA; otra, más reciente, la de la masacre del 11-M. El discurso del Partido Popular y de sus aliados se dirige a la movilización de emociones y dolores colectivos e individuales relacionados con ambas experiencias. La alegación a la traición a las víctimas de ETA por la rendición ante la banda, que de este modo parece estar recogiendo la cosecha de lo que sembró, combina la acusación más grave posible con la venenosa alusión a las teorías de conspiración sobre el 11-M. El objetivo de un discurso de este tipo queda claro: dañar al máximo al gobierno a través de la deslegitimación abso-

luta. Pero con esta estrategia se está dañando además a las instituciones de la democracia y —con eso— a los fundamentos de la convivencia entre los españoles. Fue la preocupación por la democracia y por la convivencia pacífica, dos bienes bien escasos en la historia de España, lo que llevó a las elites políticas de la Transición a apostar por el consenso en las materias que tradicionalmente se caracterizaban por una alta capacidad de polarización. Ante la situación actual, que puede constituir una oportunidad inédita de acabar definitivamente con el terrorismo vasco, la recuperación de este consenso debería ser el interés supremo de cualquier fuerza política. Sería la mejor forma de honrar el espíritu de la transición reivindicado tanto por el PP como por el PSOE.

## Bibliografía

- ALCARAZ, Francisco José (2006): “Discurso Manifestación 25 F”, en: <[http://www.avt.org/eventos/25f/Discurso\\_Manif25F.pdf](http://www.avt.org/eventos/25f/Discurso_Manif25F.pdf)> (13.08.2006).
- ALONSO, Rogelio (2006): “Modelos para el final del terrorismo”, en: *El País*, 1/03.
- BATASUNA (ed.) (2004): “Ahora el pueblo, ahora la paz, oferta política de Batasuna: texto íntegro”, en: *Gara*, 15/11, pp. 16-17.
- BAUMER, Andreas (2001): “¿Señales de esperanza en Euskadi? *El País* vasco después de las elecciones autonómicas: partidos políticos, sociedad civil y perspectivas de paz”, en: *Iberoamericana* I. 3, pp. 188-193.
- (2005): “Civil Liberties and the Challenge of Political Terrorism: The Case of Spain”, en: Rösel, Jakob/Trotha, Trutz von (eds.): *The Reorganisation or the End of Constitutional Law*. Köln, pp. 125-135.
- (2003): “ETA am Ende? Die spanische Offensive im Kampf gegen den Terrorismus”, en: *Blätter für deutsche und internationale Politik* 03, pp. 465-474.
- (2006): “ETA ohne Waffen”, en: *Blätter für deutsche und internationale Politik* 05, pp. 534-537.
- DEL BURGO, Jaime Ignacio (2006): “España tras el 11-M”, en: <[http://www.libertaddigital.com/php3/opi\\_desa.php3?cpn=32090](http://www.libertaddigital.com/php3/opi_desa.php3?cpn=32090)> (13.08).
- ELORZA, Antonio (2005): “Euskadi: ‘juego de máscara’”, en: *El País*, 19/04.
- MATA, José Manuel (2005): “Terrorism and nationalist conflict: the weakness of democracy in the Basque Country”, en: Balfour, Sebastian (ed.): *The politics of contemporary Spain*. Abingdon, NY, pp. 81-105.
- MORÁN, Sagrario (2004): *PNV-ETA. Historia de una relación imposible*. Madrid.

PRADERA, Javier (2006): "Consenso a palos", en: *El País*, 1/03.

URIARTE, Edurne (2006): "La paz de ETA", en: *Papeles FAES* n° 31, 27/07.

WOODWORTH, Paddy (2005): "Using terror against terrorists: the Spanish experience", en: Balfour, Sebastián (ed.): *The politics of contemporary Spain*. Abingdon, NY, pp. 61-80.